



**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

DEMANDANTE:	María Astrid González Giraldo
DEMANDADA:	Colpensiones
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
RADICADO Y LINK	05001-31-05-021-2021-00367-01 <a href="#">(359) 05001310502120210036701</a>

Medellín, a los veintitrés (23) días de agosto de dos mil veintitrés (2023)

**AUTO**

Conforme con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso, se acepta la renuncia del poder presentada por el abogado Fabio Andrés Vallejo Chanci, como apoderado de Colpensiones, obrante los archivos 03 y 04 - 02Segunda instancia.

En la fecha la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez, y Claudia Angélica Martínez Castillo, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **María Astrid González Giraldo** en contra de **COLPENSIONES**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín. Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

**I. ANTECEDENTES**

### **1.1. Pretensiones**

La señora María Astrid González Giraldo presentó demanda Ordinaria Laboral, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez con su retroactivo; los intereses moratorios, indexación y las costas del proceso.

### **1.2. Hechos**

En respaldo de sus pretensiones manifestó que desde el 24/02/1982 estuvo afiliada al ISS, hoy Colpensiones, y a diciembre de 2020 tiene cotizadas en su historia laboral 992,14 semanas porque no están incluidas 595,76 semanas no pagadas por su empleador Vélez Urrea y Cia Ltda., quien cambió la razón social a partir de 1998 a Donatella SA, y siguió siendo su empleador hasta el año 2008; que en el año 2018 solicitó a Colpensiones la corrección de su historia laboral y reiteró esa petición en el año 2021 cuando además pidió el reconocimiento de la pensión de vejez la cual fue negada.

La demandante manifestó también que mediante sentencia de junio 30 de 2011 el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín condenó a la empresa Donatella SA al pago de aportes en pensión por los riesgos de IVM por el período comprendido entre el 12 de febrero de 2007 al 12 de abril de 2008, y reconoció la relación laboral desde octubre de 1995 a mayo de 2007.

### **1.3. Contestación Colpensiones**

Colpensiones al contestar la demanda aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento y edad de la actora, su afiliación al ISS hoy Colpensiones y el período cotizado, así como las semanas reportadas, la reclamación administrativa elevada para obtener corrección de su historia laboral en 2018, la sentencia judicial que ordenó a la empresa Donatella SA al pago de los aportes en mora, aclarando que solo está llamada a recibir el cálculo actuarial del empleador moroso, de los demás hechos dijo que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de carga dinámica de la prueba – existencia de relación de trabajo, omisión de afiliación – deber de condicionar efectos del cálculo actuarial, riesgo de fraude, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez, improcedencia de intereses de

mora, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

## **II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, profirió sentencia el 28 de noviembre de 2022 en la que condenó a Colpensiones a reconocer y pagar en favor de la demandante la pensión vitalicia de vejez a partir del 1 de octubre de 2022, incluyendo una mesada adicional por año en cuantía equivalente a (1) smlmv, el retroactivo de \$1.000.000 calculado hasta el 31 de octubre de 2022; la indexación de las mesadas reconocidas hasta que se verifique su pago; autorizó los descuentos en salud; declaró probada la excepción de improcedencia de intereses moratorios, procedencia del descuento para financiar el sistema de salud y no probadas las demás, impuso condena en costas y ordenó remitir el expediente para tramitar el grado jurisdiccional de Consulta.

Para resolver la controversia, se planteó como problema jurídico determinar si la demandante cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez a cargo de Colpensiones y en caso afirmativo si se debe reconocer retroactivo pensional, intereses moratorios e indexación, por lo que consideró la necesidad de determinar el número real de semanas efectivamente cotizadas por la demandante para saber si cumple con las 1.300 necesarias para acceder a la pensión de vejez según la Ley 797 de 2003, ya que no existe duda sobre su fecha de nacimiento y que cumplió el requisito de edad el 16 de julio de 2018.

Definido lo anterior, dirigió su estudio a establecer si la demandante reúne o no las semanas requeridas para la pensión, en ese ejercicio encontró que en la historia laboral aportada por Colpensiones se totalizan 1.060, las que son insuficientes para acceder al derecho.

Luego examinó las pruebas aportadas al proceso con el fin de esclarecer la veracidad o no de las afirmaciones de la demandante en cuanto a que, en proceso anterior que promovió contra su ex empleador Vélez Urrea Limitada, que tramitó ante el juzgado adjunto al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, se declaró

la relación laboral entre la demandante y la empresa demandada desde octubre de 1995 hasta mayo de 2007, pero una vez revisó el contenido de la referida sentencia, concluyó que en su parte resolutive no quedó incorporada la mencionada decisión, por lo tanto no podía concederle razón a este aserto de la demandante.

Seguidamente analizó otro de los hechos en el que la parte demandante dijo que trabajó en forma ininterrumpida para Vélez Urrea Ltda. y que esa empresa cambió de nombre a Donnatela SA, y tampoco lo admitió porque, de acuerdo a los certificados de existencia y representación legal incorporados al expediente de manera oficiosa, pudo constatar que la compañía Vélez Urrea no cambió de razón social a Donnatela SA, sino que se trata de sociedades distintas, con diferente NIT, aunque observó que la gerencia de ambas la tiene una misma persona, respecto de ello dijo que esa sola circunstancia no permite condenarlas indistintamente, como lo persigue la actora.

Con los contratos de trabajo obrantes en el expediente, celebrados entre la demandante y el empleador Vélez Urrea Ltda. encontró acreditado que existió una relación laboral entre el 2 de marzo de 1992 y el 13 de diciembre de 2003, con interrupciones, como se describen en la siguiente tabla:

Cert / CT	Fecha CT	Empresa	Desde	Hasta
CT fl. 67-68	2-mar-92	Vélez Urrea y Cía	2-mar-92	31-may-92
CT fl. 65-66	5-ene-95	Vélez Urrea y Cía	5-ene-95	Indefinido
CT fl. 61-62	19-jul-99	Vélez Urrea y Cía	19-jul-99	16-oct-99
CT fl. 57-58	13-mar-00	Vélez Urrea y Cía	13-mar-00	30-jun-00
CT fl. 59-60	10-jul-00	Vélez Urrea y Cía	10-jul-00	3-dic-00
CT fl. 55-56	15-ene-01	Vélez Urrea y Cía	15-ene-01	30-jun-01
CT fl. 53-54	15-jul-01	Vélez Urrea y Cía	15-jul-01	15-dic-01
CT fl. 51-52	28-ene-02	Vélez Urrea y Cía	28-ene-02	30-jun-02
CT fl. 49-50	12-ago-02	Vélez Urrea y Cía	12-ago-02	15-dic-02
CT fl. 47-48	1-jul-03	Vélez Urrea y Cía	1-jul-03	13-dic-03

Definido esto, procedió a realizar la imputación de los tiempos en mora por el empleador, consideró que se debían reconocer todos los tiempos servidos al mismo empleador Vélez Urrea Ltda. y no cotizados, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de junio de 1996 y el 31 de enero de 1999, es decir 117,43 porque como se hicieron de forma intermitente, la imputación de pagos que realizó Colpensiones a períodos anteriores dejó sin aplicar el pago del aporte al período efectivamente realizado; y además, restó 19, semanas correspondientes al tiempo

Rdo. 05-001-31-05-021-2021-00367-01  
Rad. interno 2022-359  
Dte. María Astrid González Giraldo  
Dda. Colpensiones

entre el 10 de febrero al 28 de junio de 1998 en que la demandante trabajó para Evoluciones EU, que detalló así:

1-jun-96	30-jun-96	-	117.43		117.43	Vélez Urrea
1-sep-96	30-sep-96	-			0.00	Vélez Urrea
1-ene-97	31-ene-97	-			0.00	Vélez Urrea
1-feb-97	28-feb-97	-			0.00	Vélez Urrea
1-ene-99	31-ene-99	-			0.00	Vélez Urrea

890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/06/1996	30/06/1996	\$160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/09/1996	30/09/1996	\$163.000	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/01/1997	31/01/1997	\$172.005	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/02/1997	28/02/1997	\$196.000	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/01/1999	31/01/1999	\$236.460	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuó su análisis advirtiendo la existencia de 155,57 semanas no cotizadas entre el 19 de julio de 1999 y el 13 de diciembre de 2003, que detalló de la siguiente manera

19-jul-99	16-oct-99		12.43		12.43	Vélez Urrea
13-mar-00	30-jun-00		15.29		15.29	Vélez Urrea
10-jul-00	3-dic-00		20.43		20.43	Vélez Urrea
15-ene-01	30-jun-01		23.57		23.57	Vélez Urrea
15-jul-01	15-dic-01		21.43		21.43	Vélez Urrea
28-ene-02	30-jun-02		21.71		21.71	Vélez Urrea
12-ago-02	15-dic-02		17.57		17.57	Vélez Urrea
1-jul-03	13-dic-03		23.14		23.14	Vélez Urrea

Consideró que en estos tiempos Colpensiones, antes el ISS, a pesar de que acreditó que adelantó las gestiones de cobro contra el empleador Vélez Urrea Ltda. no aportó prueba alguna del resultado de esa gestión y, siendo ello así, no podían aplicarse efectos adversos al afiliado por la conducta omisiva tanto de su empleador como de la entidad administradora de pensiones que se abstuvo de concluir el procedimiento que legalmente tiene a su cargo, ni declaró incobrables -Decreto 2665 de 1988 artículo 75 - las sumas debidas por concepto de aportes que impidiera tener en cuenta esas semanas.

Para sustentar su decisión en cuanto a que no podían resultar adversos al afiliado los efectos de la mora del empleador se apoyaron en lo resuelto en la sentencia SU226 de 2019, CSJ SL rad 35012 de 2010, Decreto 1161 de 1994 artículo 13.

Una vez analizó estos aspectos se percató de que Colpensiones no respondió los interrogantes que le hiciera respecto a cuál fue el resultado de las gestiones de

cobro que adelantó a la empresa Vélez Urrea Ltda., en esas circunstancias consideró que podía ordenar la práctica de esa prueba en segunda instancia quien decidiría si valora o no esta prueba y que, «*para no retrasar más el trámite del proceso*», aun así, definiría el asunto de fondo.

Una vez hizo el anterior estudio, declaró que las semanas en mora no computadas por Colpensiones sumaban 273 y adicionándolas con las reconocidas en la historia laboral, que fueron 1.060,74 arrojaban un total de 1.333,74 semanas con las cuales la demandante acreditaba el número requerido para acceder al derecho pensional, ordenó el pago del retroactivo pensional.

Seguidamente analizó la procedencia de los intereses moratorios dijo que la Corte Suprema ha dicho que es necesario escudriñar las razones por las cuales se negó la pensión y que como existen una serie de inconsistencias en cuanto a la determinación de las semanas y a que debió realizar una serie de «*presunciones*», no podía imponer condena por este concepto, procedió sí a ordenar el pago indexado de las mesadas y autorizó el descuento de aportes a salud.

### **III. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.**

Ninguna de las partes recorrió el traslado para alegar en segunda instancia.

### **IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

#### **4.1. COMPETENCIA.**

Conoce la Sala de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

## 4.2. PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si en el caso sometido a estudio, se acreditaron los presupuestos de ley para reconocer la pensión de vejez a la actora, debiendo establecer si el juzgador de primera instancia se equivocó o no al relevar a la demandante de las consecuencias de la mora de su empleadora Vélez Urrea Ltda. y considerar que Colpensiones debió conceder validez a las semanas 273 semanas pagadas tardíamente o no pagadas.

## 4.3. HECHOS RELEVANTES PROBADOS

No son hechos discutidos la fecha de nacimiento del demandante, su vinculación al RPM desde febrero de 1982, las semanas reportadas y reconocidas en su historia laboral de 1.060.7 hasta el 30 de septiembre de 2022, así como que son insuficientes para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez.

## 4.4. REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ:

El tema del disfrute de la pensión de vejez, de acuerdo a la fecha de nacimiento de la demandante, debe ser analizado a partir de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que regula los requisitos así:

“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

**PARÁGRAFO 1o.** Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones; “

En el presente asunto, según se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía, la demandante nació el 16/07/1961, por lo que cumplió el requisito de edad para obtener el reconocimiento pensional el 16/07/2018 (folio 9 archivo 02Demanda), y según su historia laboral a la fecha 21/11/2022 contaba con un total de 1.060.74 semanas cotizadas (archivo 18DemandanteCumpleRequerimiento), lo que significa

que aun cuando tenía la edad exigida, le faltaba acreditar el mínimo de semanas - 1.300- para obtener el derecho pensional.

#### **4.5. PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA**

Debe precisarse, respecto de la orden impartida por el juez de instancia en la audiencia de fallo consistente en oficiar a Colpensiones para que informe el resultado de las acciones de cobro de aportes pensionales al empleador Vélez Urrea Cia. Ltda., que su potestad en cuanto al decreto de pruebas está restringida al trámite de primera instancia y a ello debió concretarse.

Cabe recordar, que de conformidad con el art. 60 del CPT y SS, «*El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo*». De ahí, que como lo prevé la citada normativa, allegar a tiempo las probanzas, implica que las partes las aporten dentro de las oportunidades legales, antes de que se profiera la decisión que ponga fin a la instancia, siempre y cuando hubieran sido solicitadas como prueba y decretadas como tal.

Tratándose de pruebas oficiosas, los funcionarios judiciales tanto de primera como segunda instancia deben emplear todos los medios que se encuentren a su alcance para su concreción, con el fin de evitar que se vulneren o pongan en peligro derechos fundamentales a la seguridad social y en especial de índole pensional.

Acerca de este punto, en sentencia de la CSJ, SL 15 abril de 2008 radicado 30434, reiterada en casación de la CSJ, SL 23 oct. 2012, rad.42740, citada en la CSJ SL13682-2016, la Corte Suprema sostuvo:

Ciertamente, la naturaleza tutelar del derecho laboral, con mejor razón cuando en su ámbito se despliega la seguridad social, obliga al juez a actuar para superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial, cuando se sospecha que de ellas pende, como en el sub-lite, una irreparable decisión de privar de protección a quien realmente se le debía otorgar.

En razón de la revisión oficiosa del fallo, el juez de segunda instancia decidirá de conformidad con las pruebas aportadas por cuanto hasta este momento no se ha recibido respuesta alguna por parte de Colpensiones relativa a la solicitud del

juzgado en cuanto a conocer cuál fue el resultado de las gestiones de cobro que inició la entidad contra la empresa Vélez Urrea Ltda.

#### **4.6. EFECTOS DE LA MORA PATRONAL**

El artículo 24 de la Ley 100 de 1993 establece que corresponde a las entidades administradoras de los regímenes pensionales promover las acciones de cobro ante el incumplimiento de las obligaciones del empleador, y según el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, ello deberá realizarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes «a la fecha en la cual se entró en mora».

Asimismo, el artículo 8. ° ibidem prevé que dichas entidades están en la obligación de verificar la correspondencia de los montos aportados con las exigencias legales e informar a los depositantes las inconsistencias que se adviertan con el fin de que efectúen las correcciones pertinentes, en concordancia con las disposiciones referentes al término para los requerimientos, la constitución en mora y la elaboración de la liquidación para iniciar los trámites del proceso ejecutivo.

Es oportuno destacar que desde la sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, la Sala de Casación laboral ha indicado de manera reiterada y pacífica que el afiliado que tenga la condición de trabajador subordinado causa la cotización con la prestación efectiva del servicio, y si el empleador no cumple la obligación de pago oportuno y la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir la obligación de las pensiones que se generen para el asegurado o los beneficiarios, siendo necesario acreditar que en ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios en ese período (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092- 2016, CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018 y CSJ SL1624-2018).

Como se vio, de antaño la postura de la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha expresado que la mora en el pago de los aportes no puede ser imputada al trabajador afiliado, sino al empleador y/o a la administradora del sistema, y en

sentencia CSJ SL1355-2019 determinó pautas a tener en cuenta por el juez de conocimiento cuando se avizore mora patronal, así:

*“Para dar respuesta al cargo, conviene recordar que esta Corporación, de manera reiterada y pacífica, ha considerado que el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relación de trabajo. Así, la actividad efectiva, desarrollada en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional a nombre del trabajador afiliado.*

*Así mismo, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL 34270, 28 oct.2008, la Sala explicó que –en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral-, en la CSJ SL8082-2015, señaló que – los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio- y en la CSJ SL8082-2015, señaló que -los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio-, y en la sentencia CSJ SL759-2018 sostuvo que –la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras-*

*Es claro entonces que los derechos pensionales y las cotizaciones son un colorario del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado y están dirigidos a garantizar al asalariado un ingreso económico periódico, tras largos años de servicio que han redundado en un desgaste físico natural. De allí que, precisamente, para que pueda hablarse de -mora patronal- es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral, si bien regido por un contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria. Dicho de otro modo: la mora del empleador debe tener sustento en una relación de trabajo real.” (negrillas y subrayas de la sala).*

En ese mismo sentido para convalidar aportes por inconsistencia o mora en los aportes, es necesario demostrar la existencia del vínculo laboral como se dijo en la sentencia SL1506-2021:

*“... En este sentido, importa recordar que esta Corporación ha adocinado, de manera pacífica y reiterada, que para convalidar los aportes en mora del empleador cuando la administradora de pensiones no activa los mecanismos de cobro para el recaudo de los aportes, se requiere la comprobación de la existencia de la relación laboral durante el período en que el trabajador dice haber prestado sus servicios, aspecto que pasó por alto el Tribunal con relación a los dos períodos validados con la empleadora Isabel Montaña de Santander, a pesar de que en uno de ellos en la historia laboral aparece la anotación ‘no registra la relación laboral en afiliación para este pago’ para los ciclos de 1995, y en el otro, no aparece demostrada la afiliación para el año 1994, lo que con mayor razón hace necesaria la verificación del vínculo laboral.*

*En el sentido indicado, en la sentencia CSJ SL 3692-2020, la Sala adocinó:*

*Sin embargo, lo dicho en precedencia debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el literal l) del artículo 13 de la Ley 100, así como con lo establecido por los artículos 15 y 17 de ese mismo cuerpo normativo, que respectivamente señalan:*

#### ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

*l. En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo;*

**ARTÍCULO 15. AFILIADOS.** <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

**1. En forma obligatoria:** <Ver Jurisprudencia Vigencia> Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

*ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.*

*Con sustento en las anteriores normas, es que la Sala ha sostenido que las cotizaciones de un asegurado al sistema, se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio o en otras palabras la existencia de una relación laboral hace que surja para el empleador el deber de aportar al sistema pensional. Así, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL514-2020, que reiteró lo dicho en la providencia CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 34270, ...”:*

En el caso bajo estudio el juzgado atendió la regla jurisprudencial antes evocada por cuanto inicialmente procedió a establecer la existencia de la relación laboral entre la demandante y la empresa Vélez Urrea Ltda. Y en ese aspecto no incurrió en ninguna equivocación, en efecto con los documentos aportados por la demandante a folios 47 a 62 y 65 a 68 del pdf demanda, es posible advertir que entre la señora María Astrid González Giraldo y la empresa Vélez Urrea Ltda. se celebraron varios contratos de trabajo, con interrupciones como se muestra en la siguiente tabla:

Cert / CT	Fecha CT	Empresa	Desde	Hasta
CT fl. 67-68	2-mar-92	Vélez Urrea y Cía	2-mar-92	31-may-92
CT fl. 65-66	5-ene-95	Vélez Urrea y Cía	5-ene-95	Indefinido
CT fl. 63-64	10-feb-98	Evoluciones E. U.	10-feb-98	28-jun-98
CT fl. 61-62	19-jul-99	Vélez Urrea y Cía	19-jul-99	16-oct-99
CT fl. 57-58	13-mar-00	Vélez Urrea y Cía	13-mar-00	30-jun-00
CT fl. 59-60	10-jul-00	Vélez Urrea y Cía	10-jul-00	3-dic-00
CT fl. 55-56	15-ene-01	Vélez Urrea y Cía	15-ene-01	30-jun-01
CT fl. 53-54	15-jul-01	Vélez Urrea y Cía	15-jul-01	15-dic-01
CT fl. 51-52	28-ene-02	Vélez Urrea y Cía	28-ene-02	30-jun-02
CT fl. 49-50	12-ago-02	Vélez Urrea y Cía	12-ago-02	15-dic-02
CT fl. 47-48	1-jul-03	Vélez Urrea y Cía	1-jul-03	13-dic-03

Por lo tanto, cuando el juzgador de primera instancia convalidó los aportes en mora del empleador Vélez Urrea Ltda., entre el 10 de febrero al 28 de junio de 1998 y el 19 de julio de 1999 y el 13 de diciembre de 2003, lo hizo porque encontró comprobada la existencia de la relación laboral durante aquellos períodos, pero no acogió la totalidad de los tiempos en que la trabajadora dice haber prestado sus servicios.

Así, aunque la demandante aseveró que en la historia laboral Colpensiones no tuvo en cuenta 595.76 semanas que no fueron pagadas por Vélez Urrea y Cia Ltda., quien fue su empleador hasta el año 2008 y quien cambió de razón social a

Donatella SA en el año 1998, las apreciaciones del juzgador de primer grado en cuanto a que la relación laboral de la demandante con Vélez Urrea y Cia. Ltda. no fue ininterrumpida por cuanto esta sociedad no cambió de razón social a Donatella se exhiben ajustadas a las certificaciones de existencia y representación legal obrantes en el sumario, por lo tanto, se confirmarán.

De igual forma se exhiben coherentes con el material probatorio las consideraciones en cuanto a que del contenido de la sentencia del Juez Primero Adjunto al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín de fecha 30 de junio de 2011, no es posible extractar la continuidad predicada por la actora porque aquella providencia solo obligó a Donatella SA a pagar la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, junto con los aportes a los riesgos de IVM y el pago de subsidios familiares por el período comprendido entre el 15/01/2007 y el 12/04/2008.

Ahora, igualmente acertó el sentenciador cuando afirmó que Colpensiones desplegó las acciones de cobro por mora contra el empleador Vélez Urrea Ltda., como se evidenció en el expediente administrativo con la liquidación certificada de deuda N.º AP-00434150 de diciembre 12 de 2020, al que se anexó cuadro de liquidación por aportes en mora desde abril de 1995 a abril de 2020, sin embargo, dicha probanza no especifica a que trabajador afiliado corresponden (folios 13 a 15 y 16 a 30), y aun cuando la administradora de pensiones activó los mecanismos de cobro para el recaudo de los aportes, no dio cuenta de cuál fue el resultado de su gestión mostrándose negligente a rendir el informe solicitado por el juzgado.

En efecto en la historia laboral actualizada aportada días antes de proferirse la sentencia, subsisten las anotaciones de los períodos en los que la demandante estuvo afiliada sin que la accionada realizara las gestiones de cobro, conforme se sigue del aparte pertinente del referido documento:

2012403254	VELEZ URREA Y CIA LT	10/10/1991	18/01/1994	\$107.675	118,86	0,00	0,00	118,86
2012403254	VELEZ URREA Y CIA LT	03/02/1994	31/12/1994	\$107.690	47,43	0,00	0,00	47,43
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/01/1995	31/01/1995	\$113.000	3,57	0,00	0,00	3,57
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/02/1995	31/07/1995	\$149.000	25,71	0,00	0,00	25,71
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/08/1995	31/08/1995	\$136.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/09/1995	30/09/1995	\$126.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/10/1995	31/10/1995	\$136.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/11/1995	30/11/1995	\$119.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/12/1995	31/12/1995	\$142.000	4,29	0,00	0,00	4,29
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/01/1996	31/01/1996	\$142.125	4,29	0,00	0,00	4,29
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/02/1996	31/03/1996	\$147.000	8,57	0,00	0,00	8,57
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/04/1996	31/05/1996	\$216.000	7,14	0,00	0,00	7,14
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/06/1996	30/06/1996	\$160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/09/1996	30/09/1996	\$163.000	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/01/1997	31/01/1997	\$172.005	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/02/1997	28/02/1997	\$196.000	0,00	0,00	0,00	0,00
890926752	VELEZ URREA Y CIA LT	01/01/1999	31/01/1999	\$236.460	0,00	0,00	0,00	0,00

En consecuencia y en armonía con las probanzas recaudadas en el proceso de marras, coincide esta Sala con la decisión del juez de instancia, de que existe mérito probatorio para la imputación de pagos por mora patronal aplicada a la historia laboral de la demandante, acreditada la relación laboral entre ella y la sociedad Vélez Urrea Ltda., y la situación de mora en el pago de aportes, al estar reportados en los meses de junio y septiembre de 1996, enero y febrero de 1997 y enero de 1999, deuda presunta y pagos aplicados a períodos anteriores, lo que da lugar a que se le otorgue el derecho a la pensión de vejez, con la inclusión que se hizo de 273 semanas, al cumplir con los requisitos de edad y el mínimo de semanas requerido.

En consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado a fin de que se ordene en a Colpensiones reconocer y pagar en favor de la actora la pensión de vejez en cuantía de un salario mínimo mensual vigente, a partir del 1 de octubre de 2022, fecha de la última cotización en razón a que a partir de allí se entiende que la demandante expresó tácitamente su deseo de no continuar amparada con los riesgos de IVM en el Sistema General de Seguridad Social, sin que sea necesaria la manifestación expresa en ese sentido, pues sus actos así lo dan a entender (Ver CSJ SL5541-2019 y CSJ SL354-2021).

La Sala no puede pasar inadvertido que con las documentales allegadas por la demandante referentes a los contratos de trabajo obrantes a folios 41 a 45, resultaba posible establecer la existencia de la relación laboral entre la demandante y la sociedad Donatella SA durante enero 23 a julio 1º de 2006, julio 4 a octubre 1º de 2005 y enero 10 a julio 3 de 2005 (folios 41-46), periodos en los cuales no se evidencia afiliación a Colpensiones y mucho menos pago de aportes, por lo tanto, no estaba habilitado para convalidar tales períodos.

En sentencia CSJ SL205-2022 se reiteró la sentencia CSJ SL1078-2021 que, en lo concerniente a la distinción entre los efectos de la mora en el pago de aportes por parte del empleador y los derivados de la falta de afiliación, dijo:

La distinción entre falta de afiliación y la mora patronal.  
Es pertinente reiterar la distinción que viene haciendo esta Sala de que una situación es la mora en la cancelación de los aportes y otra muy distinta es la falta de afiliación al sistema. En la primera (la mora), la consecuencia de la conducta del empleador no se

traslada al afiliado, si antes no se acredita que la administradora adelantó las gestiones de cobro correspondientes, mientras que, ante la ausencia, omisión o inactividad de la afiliación originada por el empleador que apareja la falta de comunicación de ingreso al sistema, el empleador debe asumir el pago de las cotizaciones correspondientes al periodo omitido, a través del denominado cálculo actuarial o título pensional, que es el mecanismo legal que refiere el art. 33 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL3004-2020).

En el caso de la no afiliación, la Corporación enseña que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación [...]

En ese aspecto la jurisprudencia ha dicho que no es posible atribuirle responsabilidad a la administradora en relación con el cobro de los aportes, en tanto desconoce el hecho generador de la cotización. De esta manera, ha señalado el precedente que Colpensiones no está habilitada para adelantar acciones de cobro contra los empleadores omisos, por cuanto era ajena a la existencia de la relación de trabajo (al respecto se puede consultar las sentencias CSJ SL3609-2021, CSJ SL3845-2021, CSJ SL1506-2021, CSJ SL5058-2020, CSJ SL1116-2022).

#### 4.7. PRESCRIPCIÓN

No está llamada a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la demanda de la referencia se impetró con el propósito de obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, de la cual se predica la imprescriptibilidad, ver al respecto sentencia SL1421 de 2019. En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Sin costas procesales de Segunda Instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### V. RESUELVE:

**PRIMERO: Confirmar** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el 28 de noviembre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora María Astrid González Giraldo en contra de Colpensiones; conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Sin costas procesales de segunda instancia por haber conocido en grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,

  
CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

  
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ